

Acuerdo de 28 de enero de 2021, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina e instalaciones complementarias en el “Hospital Clínico San Carlos”; Centros de Especialidades “Avda. de Portugal” y “Modesto Lafuente”; C. Sanitario “Sandoval” y Centros de Salud Mental “Galiana”, “Centro”, “Las Águilas” y “Hospital de Día Ponzano”, de Madrid.

Con fecha 25 de enero de 2021 se ha recibido en este Tribunal procedente del Hospital San Carlos, el recurso especial en materia de contratación presentado por la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, contra los Pliegos que rigen la licitación de referencia, junto con el expediente y el informe correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la LCSP. En el citado informe manifiesta su disconformidad con la suspensión del procedimiento solicitado por el recurrente.

El anuncio y los pliegos de la licitación de referencia que fueron publicados en el DOUE y en el perfil de contratante del órgano de contratación alojado en la PCSP el 28 de diciembre de 2020.

La recurrente en el escrito de interposición del recurso solicita que se acuerde la medida cautelar de suspensión del procedimiento de contratación hasta la resolución del presente recurso, fundamentándolo en que diversas cláusulas del PCAP podrían no ser conforme a derecho, lo que obligaría a su modificación.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de



2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.



Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

Esta misma argumentación relativa a la fase de adjudicación, nos sirve también para justificar la adopción de medidas cautelares en supuestos en que, como en el presente, no se impugna la resolución de adjudicación, sino algún otro de los actos objeto del recurso, cuando el estado de la tramitación del expediente coloca al mismo en una situación similar.

Dado que la celebración de la mesa de contratación de apertura de las proposiciones económicas está prevista para el día 23 de febrero de 2021, este Tribunal considera previsible que, con anterioridad se haya decidido sobre el fondo del asunto, por lo que no se considera necesaria la suspensión del procedimiento.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,

ACUERDA

Denegar la suspensión de la tramitación del procedimiento de adjudicación del contrato de “Servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina e instalaciones complementarias en el “Hospital Clínico San Carlos”; Centros de Especialidades “Avda. de Portugal” y “Modesto Lafuente”; C. Sanitario “Sandoval” y Centros de Salud Mental “Galiana”, “Centro”, “Las Águilas” y “Hospital de Día Ponzano”, de Madrid.



Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
Por sustitución, conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010, 19.2 LRJAP y 5 RPERMC
LA VOCAL DEL TRIBUNAL



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1240706024928215037480**

Hospital Clínico San Carlos

Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI)